

Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veintidós.

Vistos, oídos y considerando:

Primero: Que en estos autos RIT 1-195-2022, del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, RUC N° 2101023012-5, por sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós se condenó a Jaime Eduardo Escobar Caro a la pena de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor de un delito frustrado, de robo con violencia, cometido el día 12 de noviembre de 2021, en la comuna de Santiago. Por no reunir los requisitos legales, no se le concedió pena sustitutiva alguna y se dispuso el cumplimiento efectivo de la impuesta, con los abonos correspondientes por el tiempo que permaneció privado de libertad.

En contra del referido fallo el abogado Defensor Penal Público Matías Andrés Canales Puente, dedujo recurso de nulidad en favor de su representado.

Concedido el recurso y elevados los autos para el conocimiento de esta Corte, con fecha once de octubre en curso se procedió a la vista de la causa, escuchándose los alegatos de un abogado Defensor Penal Público y de un abogado del Ministerio Público.

Se fijó como fecha de lectura de esta sentencia el día de hoy.

Segundo: Que el recurrente funda su impugnación en la causal de la letra e) del artículo 374, en relación con la letra c) del artículo 342 y del artículo 297, todas normas del Código Procesal Penal.

Para respaldar su refutación, argumenta que la sentencia impugnada, al momento de fundamentar sus conclusiones y para efectos de establecer el hecho y sus circunstancias, contravino las reglas de la lógica, particularmente el principio de corroboración y de razón suficiente.

Aduce que el imputado, renunciando a su derecho a guardar silencio, indicó que no tuvo participación en los hechos materia de la acusación y que su detención se produjo a partir de una riña que tuvo con la víctima al interior del transporte público, sin que hubiese intentado sustraerle especies. A partir de ello, la defensa contravirtió la calificación jurídica atribuida por el Ministerio Público, entendiendo que los hechos no configuraban robo con violencia, sino solamente lesiones.



En estas circunstancias y a la luz de lo razonado en el motivo noveno del fallo, el único antecedente con que contó el tribunal para establecer la calificación jurídica pretendida por el Ministerio Público consiste en la declaración de la víctima, que carece de corroboración por cuanto dio tres versiones diferentes (ante funcionarios policiales, ante la Fiscalía y una tercera en estrados), no hubo testigos presenciales, no se encontró especie alguna en poder del acusado y ni siquiera ésta fue fijada fotográficamente como para poder corroborar su existencia.

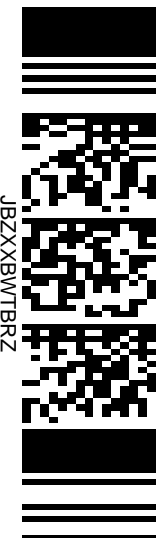
Agrega que, en ningún momento del razonamiento del tribunal, se indica por qué desestima la versión del imputado, que se corrobora con todos los antecedentes vertidos en la audiencia de juicio oral -a diferencia de las diversas versiones que da la víctima-, y en cambio otorga credibilidad a ésta. De esta manera, la defensa reprocha a la sentencia carecer de fundamentación para desestimar la versión del imputado.

Por lo explicado y normas que cita, pide tener por interpuesto recurso de nulidad contra la sentencia definitiva dictada en autos a fin de que sea acogido por esta Corte de conformidad a lo dispuesto en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal y, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 386 del mismo cuerpo legal, se declare la nulidad del juicio y de la sentencia, determinado el estado en que debe quedar el procedimiento, ordenando la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado para que este disponga la realización de un nuevo juicio oral.

Tercero: Que el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal establece: *“Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e)”*.

Por su parte, el artículo 342 del mismo código, en su letra c) señala: *“Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá: c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”*.

A su turno, el artículo 297 del citado estatuto legal prevé: *“Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con*



libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo.

La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegue la sentencia”;

Cuarto: Que, como se ha señalado reiteradamente en los fallos de esta Corte, la labor del tribunal que conoce del recurso de nulidad por la causal indicada, no es en rigor efectuar una nueva valoración de la prueba rendida en el pleito, sino controlar que aquella que realizaron los miembros del tribunal del juicio se condiga con la norma que les señala a éstos cómo hacerla, a qué parámetros sujetarse y qué reglas, máximas o tipos de conocimientos no contradecir.

Quinto: Que, en consecuencia, para determinar si se configura en la especie la causal de nulidad invocada, ha de revisarse si el tribunal llevó a cabo o no la labor de valoración de la prueba conforme lo que exige el artículo 297 citado.

Sobre este punto cabe relevar los siguientes hitos del proceso valorativo expresado en la sentencia:

1.- En primer lugar, en el motivo cuarto se deja constancia de la versión de los hechos que aportó en estrados el acusado, luego de renunciar a su derecho a guardar silencio. De ésta, cabe destacar en lo pertinente, que señaló que el día 12 de noviembre se dirigió a trabajar hacia Mapocho, donde está la Pérgola de las Flores, y debido a ello “se subió a la micro 509, subió por la parte trasera, se dirigió hacia el fondo, había una personas ahí y le pidió “ganarse al lado de la ventana”, pero le dijo “córrete de aquí”, como tirándole el cuerpo encima, se ofuscó, se puso a pelear con él, sacó una cuchilla chica que andaba trayendo, que usa para hacerse sándwich, con eso le pegó y cuando se abrieron las puertas traseras, subió el funcionario de carabineros, se dio a la fuga porque no quería irse preso por andar peleando pero no se había dado



cuenta que había agredido feo a una persona. Fue detenido como a media cuadra del lugar”. Asimismo, consigna el fallo que, interrogado por la defensa, señaló que “nunca intentó sustraerle algo a esta persona, porque no era eso lo que discutían, estaban peleando por otra cosa. Esta persona le dijo ‘córrete de aquí chileno concha de tu madre’, esa persona se ‘picó a choro’ primero, le sacó la madre y se ofuscó. No quedó con lesiones, si le pegó algún ‘charchazo’, fue leve”.

También agrega la sentencia que, interrogado por el Ministerio Público, entre otras cosas indicó el acusado que *“Esta persona estaba sola, pero había más personas dentro de la micro. No sabe si esta persona llevaba algo, no le vio un bolso, vestía con una chaqueta negra”.*

De este modo, resulta evidente que el fallo consigna, en primer lugar, una versión del acusado en la que éste dijo que la agresión que le propinó a la víctima se debió a un altercado que surgió entre ambos, en el que ésta *“se picó a choro”*; negando que hubiese intentado sustraerle especie alguna y, por ende, que tal hubiese sido el móvil de la agresión que le propinó.

2.- Enseguida, en el motivo noveno el fallo señala los elementos probatorios que valoró para establecer los hechos objeto de la acusación. Al efecto refiere, en primer lugar, el testimonio de la víctima, que en lo pertinente señaló que el día 12 de noviembre de 2021, al volver de su trabajo dentro de un bus de locomoción colectiva, sentado en la parte trasera, vio a un sujeto que amenazó en la calle con un cuchillo a una pareja de colombianos, a quienes finalmente no les hizo nada porque se defendieron, motivo por el cual este sujeto subió al bus donde iba él, se le acercó y le pidió su celular, ante lo cual la víctima se lo entregó pidiéndole que no le hiciera nada, pero el tipo sacó un arma blanca con la que lo agredió, aun cuando trató de defenderse, produciéndose un forcejeo y quedando, finalmente, con lesiones en su codo izquierdo y en el tórax, cayéndose tanto el celular como el cuchillo. Entonces el bus se detuvo y el sujeto, al ver a un Carabinero en la esquina, se bajó y huyó cuando el policía subió.

También -prosigue el fallo- se contó con el testimonio del Carabinero referido por la víctima, el Cabo 1º Víctor Fernández, quien señaló haber subido al bus porque desde él le avisaron que había una persona lesionada en su interior, y que, al subirse, los mismos pasajeros le señalaron a un joven que huía por calle Tarapacá como el autor de



las lesiones. Por lo anterior lo siguió, logrando detenerlo a los 5 minutos aproximadamente, instancia en la cual éste reconoció haber agredido a una persona peruana “*porque se me picó a choro*”, motivo por el cual lo detuvo y trasladó a la unidad policial. Luego indicó haberse dirigido hasta la posta donde estaba la víctima, quien le narró lo sucedido, dándole cuenta, en dicha oportunidad, de una dinámica similar a la relatada por ella en estrados.

En tercer lugar, los sentenciadores expresan haber considerado, también, las fotografías de las lesiones sufridas por la víctima y, por último, el testimonio del Cabo 1º de Carabineros Jonathan Vilche Tapia, quien declaró haber sido el encargado de confeccionar el parte policial respectivo, en el cual dejó constancia de lo señalado por el funcionario Fernández, en el mismo sentido de lo declarado en estrados, dejando constancia, además, que el arma blanca no pudo ser recuperada.

Finalmente, se expresa en el mismo considerando que se valoró, también, el Dato de Atención de Urgencia que da cuenta de las lesiones sufridas por la víctima.

3.- En el mismo motivo noveno el fallo que se revisa indica que, con la prueba referida, se logró acreditar que el día 12 de noviembre de 2021, dentro de un bus del Transantiago, en la esquina de calles Tarapacá con Lord Cochrane, un sujeto fue agredido con un arma blanca con el fin de que hiciera entrega del teléfono celular que portaba, el cual en definitiva quedó dentro del bus por cuanto el acusado bajó de éste al ver la presencia de un funcionario de Carabineros que procedía a subir al mismo, siendo detenido minutos después, ya que así fue narrado tanto por la víctima como por el Cabo de Carabineros Fernández, versiones que encontraron ratificación en el contenido del parte policial del que dio cuenta el carabinero Vilche Tapia.

Luego, en el motivo décimo, el tribunal califica estos hechos como robo con violencia frustrado.

Sexto: Que de lo referido en el motivo que precede queda en evidencia que el proceso de valoración de la prueba que se desarrolla en la sentencia recurrida no permite la reproducción del razonamiento utilizado por el tribunal para alcanzar las conclusiones a las que arribó respecto de la existencia de un intento frustrado por parte del acusado de sustraer y apropiarse de un teléfono celular de la víctima y, por ende, respecto de su intención de robarle.



En efecto, el fallo impugnado no expresa razonamiento alguno que permita entender por qué motivo, ante dos versiones contradictorias, prefirió una antes que otra, vale decir, por qué ante la versión, por una parte, del acusado que negó aquella circunstancia fáctica y adujo, en cambio, que agredió a la víctima simplemente porque “*se le picó a choro*”, lo que refirió ya desde el primer momento, esto es cuando fue detenido por el Carabinero Fernández -según señalaron ambos-, y que fue luego mantenida en estrados, y por otra parte ante la versión de la víctima quien, también desde que un principio, esto es, desde que declaró ante ese mismo funcionario en la urgencia de la posta, indicó, en sentido contrario, que Jaime Escobar Caro se le había acercado dentro del bus pidiéndole que le entregara su celular sacando en el acto un cuchillo; optó por creer este último relato y desestimar el primero -dando con ello por probados elementos típicos del robo-, si lo cierto es que la única diferencia entre ambas es que, aquella que sugiere un ánimo apropiatorio se hizo, además, constar en un parte policial simplemente por haberse transcrito en él lo que la misma víctima le había indicado en la posta al funcionario Fernández; es decir, sin que exista una diferencia cualitativa en términos probatorios entre ambas que permita estimar que una tiene corroboración en otros medios en tanto que la otra no, o que tiene mayor corroboración, o que una presenta debilidades o contradicciones internas de que la otra carece, o que, en fin, por alguna razón reproducible una debe ser preferida a la otra; máxime si se considera que, en este caso, ni siquiera la sentencia expresó haber valorado como medio probatorio (puesto que no fue aportado) la especie que supuestamente se habría pretendido robar.

Lo cierto es que, en estas circunstancias, al no haber expresado la sentencia que se revisa motivaciones reproducibles que permitan entender por qué dio mayor valor a la versión de la víctima que a la del acusado en el punto anotado, infringió el principio de razón suficiente y, por ende, las reglas de la lógica que integran las de la sana crítica, cuya aplicación el tribunal se encontraba obligado a realizar en el fallo, en atención al deber que en tal sentido le impone el artículo 297, en relación con el 342 letra c), ambos del Código Procesal Penal.

Séptimo: Que, dicho todo lo anterior, es menester concluir que el proceso de valoración de la prueba rendida en el juicio no aparece, en el caso de autos, ejecutado de un modo que satisfaga todas las exigencias legales referidas en el considerando anterior, puesto que el tribunal,



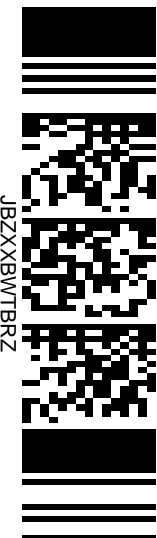
como se ha dicho, prescindió de la indispensable manifestación de un razonamiento reproducible que le permitiera dar por establecidos la totalidad de los elementos del tipo del robo con violencia frustrado -en concreto el intento frustrado de apropiación de un celular y el ánimo de robar-; deficiencia que sin lugar a dudas ha tenido influencia substancial en lo dispositivo del fallo, toda vez que condujo a dar por establecidos los hechos típicos del delito de robo con violencia frustrado y condenar, en consecuencia, al acusado, sin razones suficientes que sirvan de sustento válido a tal decisión.

Octavo: Que, en razón de las reglas de la lógica y, en particular, del principio de la razón suficiente, todo conocimiento debe estar adecuadamente fundado, lo que en otras palabras implica la exigencia de que las inferencias realizadas por el tribunal sean necesarias e inequívocas, a partir de proposiciones verdaderas, las que en el caso sub lite no fueron posibles de establecer de forma irrefutable, por las razones ya indicadas, desatendiendo de este modo el tribunal de la causa el estándar que le impone el artículo 297 del Código Procesal del ramo, que de esta forma aparece evidentemente transgredido.

Noveno: Que, consecuentemente, el recurso formulado por la Defensoría Penal Pública deberá necesariamente ser admitido al configurarse el motivo de nulidad invocado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo prevenido en los artículos 5º inciso segundo y 19 N° 3º de la Constitución Política de la República y 372, 374 letra e) y 386 del Código Procesal Penal, **se acoge** el recurso de nulidad deducido por el abogado Defensor Penal Público Matías Andrés Canales Puente, en representación del acusado **Jaime Eduardo Escobar Caro**, en contra de la sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y, en consecuencia, se anula dicho fallo así como el juicio oral que le sirvió de antecedente, correspondiente al proceso RIT 1-195-2022, RUC N° 2101023012-5, retrotrayéndose la causa al estado de celebrarse una nueva audiencia de juicio ante el tribunal en lo penal competente y no inhabilitado que corresponda, el que conocerá de él hasta la dictación de la sentencia definitiva, si procediere, todo conforme a derecho.

Acordada con el **voto en contra** de la abogada Paola Herrera Fuenzalida, quien fue de parecer de rechazar el recurso de nulidad deducido, por considerar que en el desarrollo contenido en los



considerandos noveno y siguientes del fallo impugnado se analiza pormenorizadamente la prueba rendida y, como consecuencia de dicha labor intelectual el tribunal alcanza las conclusiones que se expresan en el fallo mediante un razonamiento claro, concatenado y lógico que satisface las exigencias impuestas por el artículo 297 del Código Procesal Penal, motivo por el cual no se cumplen en la especie los requisitos necesarios para que se pueda estimar configurada la causal de nulidad invocada en el recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción del ministro interino Matías de la Noi Merino y de la disidencia su autora.

Rol N° Penal N° 4064-2022.



Pronunciado por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Miguel Eduardo Vazquez P., Ministro Suplente Matias Felipe De La Noi M. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veintidós.

En Santiago, a veintisiete de octubre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

